



JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Medellín, veintisiete (27) de julio de dos mil veinte (2020)

Radicado:	05001 40 03 013 2020 00371 00
Procedimiento:	Acción de tutela
Accionante	Luz Marina Cortes de Gutiérrez
Accionado:	Municipio de Medellín - Secretaría de Movilidad
Tema:	Debido proceso
Sentencia:	General N° 185 Especial: 172
Decisión:	Niega por improcedente dada la existencia de otros medios de defensa judicial.

Procede a resolver la acción de tutela del trámite de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Expresó el apoderado judicial, abogado Cristian Camilo Granada Quiceno, que el día 12 de noviembre de 2019, se realizó diligencia de secuestro sobre el parqueadero de propiedad de su poderdante, la señora **Luz Marina Cortes de Gutiérrez**, dentro del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra por un comparendo. Frente a ello, la afectada acudió a la Secretaría de Movilidad, a fin de que le informaran sobre los hechos y el trámite surgido dentro del proceso coactivo, dentro del cual no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

Argumentó el abogado, que su defendida le solicitó a la accionada le hiciera entrega de todas las guías de los comparendos enviados, tanto de la fotomulta que originó el secuestro del inmueble, como de las restantes multas que figuraran a su nombre y le hubiesen sido supuestamente notificadas. Dicha Secretaría, le hizo entrega de 5 guías de correo certificado, mediante las cuales se dio aviso sobre el inicio de los procesos contravencionales, correspondientes

a 4 fotomultas, sin embargo, la parte pasiva no hizo entrega de las guías de notificación de los procesos de cobro coactivo.

Posteriormente y luego de un estudio de la documentación entregada por la Secretaría de Movilidad de Medellín, la parte accionante encontró que las notificaciones de los comparendos no se realizaron en debida forma, conforme a lo siguiente:

-Respecto de la foto detección D05001000000012374097 con numero de resolución sancionatoria 420649 del 18 de agosto del 2016, la notificación se envió a la dirección Cra 56 No 45 54 de Abejorral, Antioquia, la cual está reportada en el RUNT, por lo cual no tiene reparo frente a ello.

-La fotomulta N° D05001000000013916581 con numero de resolución sancionatoria 765374 del 22 de mayo del 2017, que dio origen al inicio del proceso contravencional y en el cual se ordenó la diligencia de secuestro del bien inmueble propiedad de la agenciada, no fue debidamente notificada. Pues la misma, se envió inicialmente a la dirección Cra 56 No 45- 54 de Rionegro, Antioquia, la cual no correspondía al domicilio de la actora y tampoco había sido reportada al RUNT.

Seguidamente, la accionada notificó nuevamente la fotomulta N° D05001000000013916581, a la dirección Cra 56 No 45-54 de Abejorral, Antioquia, la cual como se dijo anteriormente, correspondía a la dirección del domicilio de la señora **Luz Marina Cortes de Gutiérrez**, no obstante, la oficina postal certificó “*No reside*”, lo cual no le resulta lógico a la accionante, quien reside en ese lugar hace más de 30 años y donde recibió una notificación por otra fotomulta.

Frente a los comparendos N°s D05001000000017317787 y D05001000000017338478 con números de resolución sancionatoria 468920 del 3 de noviembre del 2017 y 471541 del 28 de noviembre de 2017 respectivamente, los mismos fueron notificadas en la dirección Altos de Cañaveral Apto 101 de Floridablanca, Santander. Municipio en el cual nunca ha residido la señora **Luz Marina Cortes de Gutiérrez**, ni ha sido reportada en el RUNT

Conforme a todo lo anterior, el apoderado judicial consideró que la Secretaría de Movilidad de Medellín, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de su poderdante, toda vez que no le fueron notificadas en debida forma las fotomultas. En consecuencia, solicitó se le ordenara a la accionada decretar la nulidad de todo lo actuado al no contar con las pruebas para demostrar que se actuó respetando el debido proceso.

1.2. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 13 de julio del presente año, ordenando requerir a la autoridad reclamada, para que se pronunciara respecto de lo alegado por la parte demandante y se ordenó oficiar al RUNT para que suministrara las direcciones de la afectada.

1.3. La Secretaría de Movilidad de Medellín, a través del Inspector de Policía Urbana, dio respuesta dentro del término otorgado por el Despacho, indicando que en lo referente al comparendo N° D05001000000012374097 del 17 de junio de 2016, mediante Resolución 202050035503 del 14 de julio de 2020, se decretó la prescripción de esa orden y la información se actualizó en el sistema de la Secretaría de Movilidad

Indicó que la inconformidad expuesta por la actora se centra en el proceso de notificación de las siguientes ordenes de comparendos captadas en el vehículo de placas **FMC 566**, de propiedad de la señora **Luz Marina Cortes de Gutierrez**.

CUADRO N 1

RESOLUCIÓN N	FECHA RESOLUCIÓN N	ORDEN DE COMPARENDO	FECHA ORDEN DE COMPARENDO
0000471541	28/11/2017	D05001000000017338478	26/09/2017
0000468928	03/11/2017	D05001000000017317787	05/09/2017
0000765374	22/05/2017	D05001000000013916581	01/12/2016

Adujo que, en relación a la normatividad en materia de procedimientos contravencionales nacidos en razón a la comisión de presuntas infracciones captadas por medios tecnológicos, se debe tener en cuenta dos aspectos importantes. Inicialmente, los comparendos por fotodetección se encontraban regulados por la Ley 769 del 2002 o Código Nacional de Tránsito, modificado por la Ley 1383 de 2010; posteriormente, se expidió la Ley 1843 de 2017, que complementó y modificó la normatividad existente, a través de la cual se

reguló específicamente la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones, la cual actúa en complemento del CNT, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia de cada una de las infracciones en discusión.

Indicó la parte que, la notificación del comparendo N° **D05001000000013916581**, del 1 de diciembre de 2016, fue enviada a la dirección **carrera 56 N° 45-54 de Abejorral- Ant.**, tomada de la base de datos de la Secretaría de Movilidad de Medellín, la cual se alimenta con los datos suministrados por el ciudadano, ya que para la fecha en que se cometió la infracción, no se encontró dirección registrada en el RUNT. Pero, las empresas de correos Servientrega y/o Domina hizo la devolución de la orden de comparendo, certificando que no fue posible hacer la entrega y reportaron como novedad **“NO RESIDE”**.

Precisó que el envío de la fotomulta se hizo dentro del término legal de tres (3) días hábiles posteriores a la infracción a la empresa de mensajería y que además, la Secretaría de Movilidad cuenta con tres días hábiles para enviar a la empresa de correo certificado los documentos y constancias a efectos de que se disponga a entregar materialmente al ciudadano los soportes de la infracción cometida, y son estos tres días hábiles de los que habla el Artículo 135 del C.N.T, fecha que se puede observar en la parte inferior de la guía de envío o en caso que exista orden de servicios de Servientrega en la fecha que se certifique allí.

Aclararon que las causales de devolución “no reside” o “*cambio de dirección*”, se tienen como aquellos casos en los que las personas que se encuentran en el inmueble indica que el destinatario no vive en ese lugar y no corresponde a una manifestación hecha por la compañía de mensajería de manera caprichosa, máxime si se tiene en cuenta el error generalizado que lleva a creer que al evitar ser notificado por correspondencia podría eximirse de responsabilidad, no obstante el trámite se continúa mediante la publicación del aviso, a pesar de que se agotó la notificación por correo sin ser posible contactar a la accionante por razones ajenas a la entidad. Así mismo, en atención al párrafo segundo del artículo 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, se realizaron las publicaciones de citaciones para notificaciones personales, en

la cartelera de la Secretaría de Movilidad de Medellín y en la página WEB de la misma entidad y se fijaron de igual manera las notificaciones por aviso.

Recordaron, que los comparendos posteriores al 14 de julio de 2107, se les aplica la Ley 1843 de 2017, la cual en la actualidad se encuentra vigente. Frente al proceso de notificación el artículo 8 de dicha normatividad establece lo siguiente:

Artículo 8°. Procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas tecnológicas, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento que se describe a continuación: El envío se hará por correo y/o correo electrónico, en el primer caso a través de una empresa de correos legalmente constituida, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la validación del comparendo por parte de la autoridad, copia del comparendo y sus soportes al propietario del vehículo y a la empresa a la cual se encuentra vinculado; este último caso, en el evento de que se trate de un vehículo de servicio público, En el evento en que no sea posible identificar al propietario del vehículo en la última dirección registrada en el RUNT, la autoridad deberá hacer el proceso de notificación por aviso de la orden de comparendo

Respecto a los comparendos: D05001000000017338478 del 26 de septiembre de 2017 y D05001000000017317787 del 5 de septiembre de 2017, los mismos fueron notificados a la dirección reportada RUNT, **Altos de cañaveral Campestre Trr 9 Apto. 101 Floridablanca -Santander,** y la empresa de correos Servientrega, de acuerdo con las guías, informaron que las entregas fueron efectivas, por lo tanto, se configuró el presupuesto de notificación por correo certificado, se procedió a convocar las audiencias públicas y el Inspector profirió las Resoluciones por medio de las cuales se sancionó a la accionante.

Advirtió la accionada que, que es obligación de los ciudadanos propietarios de vehículos, actualizar sus datos, el no hacerlo implica que la notificación se envíe a la última dirección registrada en el RUNT, es decir que era su deber actualizar sus datos, por lo que se considera que a la accionante no se le vulneró ningún derecho y que el presente asunto se debe debatir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Respecto a los procesos de cobro coactivo de los comparendos D05001000000017338478 y D05001000000017317787, manifestaron que una vez ejecutoriada las resoluciones, son remitidas a la Unidad de cobro con base en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el día 02 de agosto de 2019 mediante Resolución 000000005098233 se expidió el mandamiento de pago en razón de la orden de comparendo D05001000000017338478 del 26 de septiembre de 2017 y D05001000000017317787 del 05 de septiembre de 2017. El día 02 de agosto de 2019, se remitió la citación para notificación personal registrada en el RUNT y en las bases de datos de la entidad, “CR 71 A # 51 A 57 IN 99026 MEDELLIN - Santander” “ALTOS DE CAÑAVERAL CAMPESTRE TRR 9 AP 101 Floridablanca -Santander”, la primera no fue entregada de acuerdo a la guía 728209400922 causal de devolución “*dirección errada*” y la segunda no se entregó con la causa de devolución “*falta información*” de acuerdo a la guía 728209300922

Por lo tanto, la Secretaria de Movilidad de Medellín se encuentra dentro de los términos legales para iniciar el proceso de cobro coactivo de la obligación, conforme al artículo 159 del Código Nacional de Transito.

"La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir".

Frente al proceso coactivo del comparendo N° D05001000000013916581, argumentaron que, una vez ejecutoriada la resolución se remitió a la Unidad de cobro con base en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el día 25 de enero de 2019 mediante Resolución N° 000000004866626 se expidió el mandamiento de pago el 1 de diciembre de 2016 y se decretó el embargo y secuestro, del derecho sobre el inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria No. 01N-5021026. El día 25 de enero de 2019 enviaron la citación para notificación personal a las direcciones registradas en las bases de datos de esta entidad “ALTOS DE CAÑAVERAL CAMPESTRE TRR 9 AP 101- ANTIOQUIA, CONSTANCIA DE 2 LLAMADAS 21419118 a los números 6905495 y 3006278899”, sin respuesta positiva y en la CARRERA 56 # 45 - 54 ABEJORRAL – ANTIOQUIA”, la cual NO se entregó efectivamente por causa de devolución “DIRECCIÓN INCORRECTA” de acuerdo a la guía 607078300920.

También se envió a la “*CARRERA 71 A N° 51 A 57 INT. 9926 - MEDELLIN - ANTIOQUIA*”, la cual no se entregó efectivamente por causa de devolución “*DIRECCIÓN INCORRECTA*” de acuerdo a la guía 607078100920 y como no fue posible la entrega se procedió a realizar la notificación por aviso.

Seguidamente, el ente territorial hizo un recuento normativo respecto a la utilización de los medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito, el debido proceso administrativo contravencional por evidencias tecnológicas, de los presupuestos procesales de la acción de tutela y de la improcedencia de la mismas frente a los principios de subsidiariedad y residualidad.

Conforme a todo lo anterior, considera el accionado que se le ha garantizado el debido proceso administrativo a la afectada al momento de imponerle la sanciones, ya que, el trámite se desarrolló dentro de los parámetros establecidos en la Constitución y en la Ley. Además, que se acude a la acción de tutela de manera apresurada e injustificada, pues la misma tiene las acciones administrativas como la nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo tanto, la solicitud de tutela debe declararse improcedente, ya que se garantizó el debido proceso.

II. COMPETENCIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 2591 de 1991, artículo 32, es competente este Despacho para conocer y decidir respecto de la solicitud de tutela impetrada.

III. PROBLEMA JURÍDICO.

De acuerdo con la situación fáctica puesta de presente en el asunto bajo estudio, se debe determinar si el Municipio de Medellín- Secretaría de Movilidad, le está vulnerando los derechos fundamentales a la solicitante.

IV. CONSIDERACIONES

4.1 DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA (ACTIVA – PASIVA) EN LA ACCIÓN DE TUTELA. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución

Política “*Toda Persona*” puede recurrir a la acción de tutela “*para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública*”.

Conforme lo anterior, la acción de tutela puede ser ejercida por toda persona que considere que le están vulnerando sus derechos constitucionales fundamentales sea nacional o extranjera, natural o jurídica, ciudadano o no, que se halle en el territorio colombiano o se encuentre por fuera y la autoridad o particular que vulneró los derechos fundamentales se encuentre en Colombia. Así pues, puede ser ejercida directamente o por quien actúe a su nombre, bien sea por medio de (i) un representante legal en el caso de los menores de edad, las personas jurídicas, los incapaces absolutos y los interdictos; (ii) mediante apoderado judicial; y (iii) por agencia oficiosa. En estos tres últimos casos se debe probar la legitimación en la causa por activa.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se evidencia que el abogado Cristián Camilo Granada, actúa como apoderado de la señora **Luz Marina Cortes de Gutiérrez**, tal como se otea en plenario a través del poder conferido al profesional del derecho.

Se tiene además la legitimación en la causa por **pasiva** de la accionada MUNICIPIO DE MEDELLÍN-SECRETARÍA DE MOVILIDAD, toda vez que es a la que se le endilga la “presunta” vulneración de los derechos fundamentales esgrimidos por el apoderado judicial de la señora **Luz Marina Cortes de Gutiérrez**.

4.2. SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Sabido es que el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagra la tutela para la protección de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos han sido vulnerados o están siendo amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Sin embargo, ésta sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial instituido en el ordenamiento jurídico para la salvaguarda de los intereses en pugna, salvo que se utilice como mecanismo transitorio enderezado a evitar un perjuicio de carácter

irremediable. Es lo que se conoce con el nombre de *subsidiariedad* de la acción de tutela y que se erige como un requisito de procedibilidad de la misma.

En términos similares, la Corte Constitucional se ha referido en múltiples ocasiones al concepto de *subsidiariedad*, y como ejemplo de ello, en la sentencia T-063 de 2013 el alto tribunal sostuvo que *“Por su propia naturaleza la acción de tutela tiene un carácter residual o subsidiario, por virtud del cual procede de manera excepcional para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su protección. Así las cosas, este carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias atribuido por la Constitución Política a las diferentes autoridades judiciales, lo cual tiene apoyo en los principios constitucionales de independencia y autonomía de la actividad judicial. No obstante, aun existiendo otros mecanismos de defensa judicial, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que la acción de tutela está llamada a prosperar, cuando se acredita que los mismos no son lo suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral, o no son lo suficientemente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”*¹.

Del mismo modo, la Corte Constitucional, en lo que a la subsidiariedad se refiere, ha expresado que *“(…) las controversias en torno de la legalidad de los actos administrativos deben ser discutidas ante la jurisdicción correspondiente, no siendo viable pretender sustituir ese trámite por este mecanismo especial de amparo de las prerrogativas inherentes a las personas, pues desnaturaliza la acción constitucional consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, pues en modo alguno puede servir de medio para ventilar controversias que no se han puesto previamente en conocimiento de la jurisdicción respectiva, habida cuenta de su carácter subsidiario (…)”*²

Recientemente en sentencia T-028 de 2017, M.P. ALBERTO ROJAS RÍOS precisó:

“La Corte ha señalado que hay ciertos eventos en los que a pesar de existir mecanismos ordinarios de protección, resulta admisible acudir directamente a la acción de tutela con el objeto de obtener la protección pretendida, los cuales

¹ Corte Constitucional Sentencia T-063 de 2013. Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez.

² Corte Constitucional Sentencia T-243 de 2014. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo

han sido sintetizados de la siguiente manera: **(i)** cuando se acredita que a través de estos es imposible al actor obtener un amparo integral a sus derechos fundamentales, esto es, en los eventos en los que el mecanismo existente carece de la idoneidad y eficacia necesaria para otorgar la protección de él requerida, y, por tanto, resulta indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva en forma definitiva la litis planteada; eventos dentro de los que es necesario entender que se encuentran inmersos los casos en los cuales la persona que solicita el amparo ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional y, por ello, su situación requiere de una especial consideración por parte del juez de tutela; y **(ii)** cuando se evidencia que la protección a través de los procedimientos ordinarios no resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuración de un perjuicio de carácter irremediable, caso en el cual el juez de la acción de amparo se encuentra compelido a efectuar una orden que permita la protección provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven ante el juez natural.”

Como puede observarse la acción de tutela es procedente cuando los medios ordinarios de defensa no son expeditos o que éstos no tengan la capacidad de resolver el problema. Por lo que la acción de tutela no es un mecanismo de reemplazo de aquellos que el ordenamiento jurídico ha establecido como adecuados para la solución de los conflictos.

4.3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DEBE ADELANTARSE ANTE LA COMISIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO CAPTADAS A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS. La Corte Constitucional en la sentencia T 051 de 2016 expuso que “El procedimiento que debe surtirse ante una infracción de tránsito captada por medios tecnológicos está regulado en la Ley 769 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, y por la Ley 1383 de 2010, por la cual se reforma la Ley 769 de 2002-Código Nacional de Tránsito-, y se dictan otras disposiciones. Entiéndase infracción de tránsito la “transgresión o violación de una norma de tránsito”³.

“En este sentido, es pertinente resaltar que el uso de tecnologías permite a las autoridades de tránsito cumplir su función policiva en el marco de los principios

³Artículo 2 de la Ley 769 de 2002

de eficacia y economía, en los términos del Artículo 209 de la Constitución Política y del Artículo 3º, numerales 11 y 12, de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior debido a que se permite acceder a medios probatorios precisos y pertinentes, que logran individualizar el vehículo, el lugar, la hora y el motivo de la infracción, elementos suficientes para iniciar el proceso contravencional. De acuerdo al párrafo 5 del artículo 8 de la Ley 769 de 2002, la autoridad encargada del Registro Nacional de Conductores está en la obligación de actualizar los datos pertinentes, para el efecto, una de las modalidades empleadas podrá ser la autodeclaración. De acuerdo a la norma, en caso de que el propietario no efectuó la declaración será sancionado con multa de hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

4.4. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO.

Conforme lo ha expuesto en múltiples ocasiones la Corte Constitucional⁴, el procedimiento de cobro coactivo tiene una naturaleza de índole administrativa. Puede ser definido o conceptualizado como *“un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesiten con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales”*⁵.

Por su parte, en sentencia T-447 de 2000, la Corte Constitucional se refirió al procedimiento de cobro coactivo en los siguientes términos: *“Los llamados procesos de jurisdicción coactiva no son de naturaleza jurisdiccional sino administrativos; por tanto, las decisiones que en su trámite adopten las autoridades competentes para adelantarlos están sometidas al control judicial, y les son aplicables las normas generales que regulan la actividad de la Rama Ejecutiva, entre ellas las que consagran el principio de razonabilidad. (Subrayado fuera del texto)”*⁶.

El procedimiento de cobro coactivo al tener, entonces, naturaleza administrativa, los actos que se produzcan en su desarrollo de ninguna manera quedan por fuera del control judicial. Por lo mismo, al ser actos administrativos de contenido particular que inciden de manera directa en la creación, modificación o extinción de obligaciones o derechos en cabeza de los

⁴ Entre otras, confrontar la T-753 de 2012, T-604 de 2005, T-628 de 2008, C-649 de 2002, C-939 de 2003.

⁵ Sentencia T-753 de 2012. Corte Constitucional. Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio.

⁶ Sentencia T-447 de 2000. Corte Constitucional. Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz.

administrados, resulta claro que éstos pueden acudir a las vías judiciales instituidas por el ordenamiento jurídico con miras a controvertir su legalidad⁷. (resalto fuera de texto).

4.5 CASO CONCRETO. De acuerdo con la situación fáctica puesta de presente por el apoderado judicial accionante, el precedente jurisprudencial y el marco legal expuesto, se tiene que para el asunto *sub examine* la tutela deviene, en principio, en improcedente, por contar con otros medios de defensa judicial, en tanto su controversia se centra en la presunta vulneración de derechos por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín en los procesos contravencionales para la imposición de multas de tránsito, proceso que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que se trata de un trámite de carácter administrativo.

En efecto, con miras a controvertir decisiones de índole administrativa como la que hoy se pone en entredicho, el legislador diseñó mecanismos judiciales idóneos que pueden hacerse efectivos ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, tales y como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo término de caducidad debe contabilizarse teniendo en cuenta la presunta indebida notificación que alega, y que debe ser objeto de prueba en el trámite jurisdiccional y la revocatoria directa de los actos administrativos. Sobre este último mecanismo, puede resaltarse que desde el artículo 93 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es perfectamente posible que la parte actora efectúe los cuestionamientos que realiza hoy en sede de tutela, máxime cuando alega una vulneración constitucional⁸.

Incluso, dentro del trámite coactivo por la administración, la parte actora cuenta con la posibilidad de hacer valer su derecho de defensa en dicho

⁷ Así lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-649 de 2002 a propósito de una demanda de inconstitucionalidad frente al Decreto 0624 de 1989 por medio del cual se expidió el Estatuto Tributario, refiriéndose al procedimiento de cobro coactivo instituido para el cobro de deudas fiscales, sosteniendo que “*la denominada “jurisdicción coactiva”, es decir, la facultad para definir situaciones jurídicas sin necesidad de acudir a la acción judicial (autotutela ejecutiva), se enmarca dentro de la órbita de la función administrativa cuyo objetivo es lograr el cumplimiento de una obligación tributaria en sede administrativa. Empero, ello no significa que ese procedimiento sea ajeno al control judicial, no solo porque el contribuyente puede demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa el acto impositivo de la obligación tributaria, sino, además, porque incluso puede demandar ante esa misma jurisdicción el acto que resuelve sobre las excepciones y ordena continuar con la ejecución (E.T. artículo 835). Vistas así las cosas, la Corte concluye que la jurisdicción contencioso administrativa mantiene el control al ejercicio de la función administrativa, tanto en la etapa de determinación y liquidación del tributo como en la de su recaudo forzoso. (Subrayado fuera del texto).*”

⁸ Literalmente, la norma señala que “*Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona*”.

escenario formulando las excepciones que considere, así como de controvertir las decisiones que allí se adopten, las cuales constituyen verdaderos actos administrativos.

De tal forma, resulta claro que la afectada puede acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para efectuar los cuestionamientos que hoy pretende hacer a través de la acción de tutela, instrumento especialísimo y subsidiario diseñado para la protección efectiva y rápida de los derechos fundamentales.

Téngase presente que la Corte Constitucional, en sentencia **T-051 de 2016**, expuso que ante irregularidades presentadas dentro de un trámite contravencional es viable acudir a los instrumentos judiciales establecidos legalmente. Sobre el particular, señaló la Corte que “*existe otro medio ordinario de defensa judicial idóneo para su protección, consistente en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho*”.

En la misma sentencia, la Corte indicó, ante una tutela incoada por supuestas irregularidades dentro de un trámite contravencional de tránsito, que si bien, en principio, ante una vulneración del debido proceso por parte de la autoridad estatal, “(...) *la tutela es procedente. No obstante, como se analizó, cuando existan otros medios ordinarios de defensa judicial idóneos para la protección de las garantías fundamentales y no se avizore un eventual perjuicio irremediable, se debe acudir a estos de manera preferente*” (Resalto intencional).

No obstante, el carácter subsidiario de la acción de tutela, la misma puede resultar procedente cuando se interpone con miras a evitar un perjuicio irremediable, y en este caso, corresponde al Juez Constitucional analizar los supuestos de hecho planteados por el apoderado para determinar la viabilidad de la acción, bien directamente o como mecanismo transitorio.

Pese a lo anterior, en el presente caso no se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela, pues la parte accionante no aportó las pruebas de las que se pudiera deducir éste, en tanto la sola imposición de unas multas y su correspondiente sanción, no

constituyen en sí misma un perjuicio irremediable⁹; en consecuencia, no puede erigirse como argumento suficiente para no acudir a las herramientas jurídicas pertinentes.

Ahora bien, si en gracia de discusión, se entrara a analizar una posible vulneración al debido proceso por la indebida notificación a la señora **Luz Marina Cortes de Gutiérrez**, y como consecuencia de ello la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa, acorde con las pruebas allegadas por las partes se tiene lo siguiente:

-Los comparendos D05001000000017338478 del 26 de septiembre de 2017 y D05001000000017317787 del 5 de septiembre de 2017, fueron debidamente notificados a la agenciada en la dirección que se reportaba y se reporta actualmente en el RUNT la cual correspondía a la **Altos de Cañaveral Campestre Torre 9 Apto. 101 Floridablanca- Santander** y de las constancias de entrega de notificación por parte de la empresa postal Domina, se desprende según su certificación que las mismas fueron “*Entregadas*”. Significando ello, que la señora **Cortes de Gutiérrez**, tuvo conocimiento de esas infracciones y no solicitó la audiencia a que tenía derecho a fin de efectuar los reparos que hoy pretende hacer a través de la acción de tutela.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le advierte a la parte tutelante, que si bien dentro de los hechos manifestó que la dirección **Altos de Cañaveral Campestre Torre 9 Apto. 101 Floridablanca- Santander**, no correspondía al domicilio de la afectada, también, lo es que dicha dirección es la que actualmente se encuentra registrada en RUNT, además de la **calle 84 N° 58-50 Torre 5 Apto. 1030 de Itagüí**.

En ese sentido, se observa que la señora **Luz Marina Cortes de Gutiérrez**, no cumplió, ni cumple con su deber legal de tener actualizado el RUNT, pues cabe resaltar que, acorde con lo estipulado en la Ley 1005 de 2006 en su artículo 10¹⁰ e igualmente en la Resolución 3027 de 2010 en el artículo 6¹¹, es obligación de todo ciudadano que maneja vehículos automotores –automóvil

⁹ “*la multa impuesta no puede considerarse en sí misma un perjuicio irremediable, y teniendo en cuenta que al demandarse la nulidad de un acto administrativo se cuenta con la posibilidad de solicitar su suspensión provisional, medida cautelar que hace perder al acto su fuerza ejecutoria mientras se decide de fondo sobre su legalidad*” Corte Constitucional, Sentencia T-115 del 12 de febrero de 2004. MP. Dr. Jaime Córdoba Triviño

¹⁰ Sujetos obligados a inscribirse y a reportar información: ... “2. Todos los conductores de vehículos de servicio particular o público, los conductores de motocicletas. Será responsable de su inscripción, el organismo de tránsito que expidió la licencia”.

¹¹ En el evento de cambio de domicilio o de dirección electrónica, los propietarios de vehículos automotores deberán actualizar su dirección de notificación física y/o electrónica en el organismo de tránsito ante el cual se encuentra matriculado su vehículo y este a su vez, deberá cargar la información al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT.

o motocicleta- tener actualizada su información en el RUNT, de igual manera en la Ley 1843 de 2017, en su artículo 8, se indica que no actualizar los datos implica que la notificación se envié a la última registrada para el momento de los hechos, como en este caso ocurrió.

Frente al comparendo D05001000000013916581, del 1 de diciembre de 2016, se evidencia que la Secretaría de Movilidad envió una de las notificaciones a la dirección **Carrera 56 N° 45-54 de Abejorral- Antioquia**, tomada de la base de datos de la Secretaría de Movilidad de Medellín, la cual se alimenta con los datos suministrados por el ciudadano, ya que para la fecha en que se cometió la infracción no se encontró dirección registrada en el RUNT. Dicha dirección igualmente fue confirmada en los hechos de la solicitud por la afectada como su domicilio desde hace 30 años.

Sin embargo, la empresa de correos Domina hizo la devolución de la orden de comparendo, certificando que no fue posible hacer la entrega y reportaron como novedad **“NO RESIDE”** y conforme a ello, la accionada procedió en atención al párrafo segundo del artículo 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, a publicar las citaciones para notificaciones personales, en la cartelera de la Secretaría de Movilidad y en la página Web y se fijaron de igual manera las notificaciones por aviso.

Pese a ello, el Juzgado le insiste a la parte accionante que su inconformidad frente al trámite de la notificación de este último comparendo, deberá ser debatida ante la jurisdicción Contencioso haciendo uso de las acciones administrativas como medios ordinarios de defensa judicial idóneos para la protección de sus garantías fundamentales. Aunado a lo anterior tampoco se avizora un perjuicio irremediable que haga imperioso la intervención del Juez de tutela, pues como se dijo en precedencia, una fotomulta y su correspondiente sanción, no constituyen un perjuicio irremediable.

Así las cosas, puede concluirse que la accionada realizó las gestiones de notificación de los mencionados comparendos tal y como lo indica la norma, de igual manera, ocurrió con la notificación por aviso, por lo que obran en el expediente con total normalidad. Sumado a ello, en los actos administrativos proferidos se guarda una estrecha relación de los hechos acontecidos con las normas dispuestas por el ordenamiento, por lo que, ante la falta de oposición por parte de la infractora, la decisión del Competente se concentró en

encuadrar una falta contravencional en un supuesto jurídico e imponer así, una sanción, por lo que no se avizora una actuación arbitraria dentro del trámite de la notificación del trámite contravencional.

Conforme a lo anterior, la Corte Constitucional ha reiterado sobre la improcedencia de la acción de tutela para remediar errores u omisiones del propio solicitante del amparo, de tal forma que, si los mecanismos no han sido utilizados ni ejercidos por las partes conforme a las atribuciones y competencias legales, no sería procedente conceder el amparo, pues el mecanismo de la acción no se ha diseñado para reparar la inactividad o la negligencia de quien la invoca. **Finalmente, ha establecido que, cuando quien acude a la acción de tutela ha dejado vencer términos procesales o ha dejado de utilizar los mecanismos a su disposición, sin que exista una justa causa para hacerlo, no cumple en su tutela el requisito de subsidiariedad¹².**

-Finalmente y respecto al comparendo N° D05001000000012374097 del 17 de junio de 2016, el Despacho no hará pronunciamiento alguno, toda vez que como lo manifestó la parte accionante en los hechos de la solicitud de tutela, no tenía reparo alguno sobre el mismo. Además, mediante Resolución 202050035503 del 14 de julio de 2020, se decretó la prescripción de esa orden y la información se actualizó en el sistema de la Secretaría de Movilidad.

De otro lado, es pertinente acotar que si bien es cierto en sentencia C-038 de 2020 la Corte Constitucional declaró la inexecutable del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, lo fue únicamente respecto del párrafo 1°, eliminando la solidaridad que allí se establecía entre propietario y conductor, concluyó que al estar dentro del trámite sancionatorio, tal solidaridad debía examinarse bajo tres lineamientos constitucionales: (i) Respeto del derecho de Defensa, (ii) Principio de imputabilidad o responsabilidad personal y, (iii) Responsabilidad por Culpa, significando ello que el procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas tecnológicas continúa vigente y de ahí el análisis efectuado en el párrafo precedente.

En tal sentencia la Corte claramente determinó que tal decisión no implicaba la inconstitucionalidad del sistema de detección automática de infracciones

¹² 10 Sentencia T- 871 del 2011.

de tránsito, lo que le permite a esta funcionaria concluir, luego de un análisis sistémico de la norma y el pronunciamiento Constitucional, que tal situación no desdibuja el carácter subsidiario de la acción constitucional, pues únicamente ameritaría la intervención del Juez de Tutela cuando se avizore un perjuicio irremediable, lo que no aconteció en este caso.

En conclusión, se confirma entonces que la presente acción de tutela deviene en improcedente, dada la existencia de otros medios de defensa judicial aptos para lograr la finalidad perseguida¹³, aunado a que no se presenta un perjuicio irremediable que justifique su prosperidad.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la suscrita **Juez Trece Civil Municipal de Oralidad de Medellín**, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

Primero. Denegar el amparo constitucional solicitado por **Luz Marina Cortes de Gutiérrez**, quien actúa a través de apoderado judicial, para la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el **Municipio de Medellín- Secretaría de Movilidad**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo. NOTIFÍQUESE por el medio más expedito y eficaz posible la presente decisión a las partes, según lo dispuesto por los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y artículo 5° del Acuerdo 306 de 1992, dejando la respectiva constancia en el expediente, advirtiendo acerca de la procedencia de la IMPUGNACIÓN de este fallo, la cual puede interponerse dentro de los tres (03) días siguientes a su notificación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

¹³ Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-215 del 2 de marzo de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis. En esta decisión se adujo que el medio Judicial de lo Contencioso Administrativo “es idóneo y eficaz para alcanzar los propósitos planteados por los peticionarios en cuanto al derecho al debido proceso se refiere, máxime cuando en la situación descrita por ellos no se vislumbra la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga viable la acción de tutela como mecanismo transitorio, toda vez que la multa impuesta no puede considerarse en sí misma un perjuicio irremediable, y teniendo en cuenta que al demandarse la nulidad de un acto administrativo se cuenta con la posibilidad de solicitar su suspensión provisional, medida cautelar que hace perder al acto su fuerza ejecutoria mientras se decide de fondo sobre su legalidad.

NOTIFÍQUESE

PAULA ANDREA SIERRA CARO

JUEZ

2

Firmado Por:

PAULA ANDREA SIERRA CARO

JUEZ MUNICIPAL

JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**f252fc5c54009f2f4ca60a4d7e58a967e623c549e1e08a8bad19071ecbcf8
9b9**

Documento generado en 27/07/2020 09:06:47 a.m.